



**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE CALI
SALA CIVIL DE DECISIÓN
MAG. PONENTE DR. HOMERO MORA INSUASTY**

Santiago de Cali, dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso: Responsabilidad civil extracontractual
Demandante: Jamileth Pechene Montealegre
Demandado: Héctor Fabián Chaparro Cabrera y otros
Radicación: 76001-31-03-001-2022-00104-02
Asunto: Apelación de auto

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Decidir el recurso de apelación formulado por el demandado Héctor Fabián Chaparro Cabrera, frente al auto del 20 de junio de 2023, proferido por el Juzgado Primero Civil de este circuito, por el cual se abstuvo de decretar las pruebas pedidas por el demandado por cuanto su contestación de la demanda fue extemporánea.

II. ANTECEDENTES

1.- La foliatura da cuenta que dentro del proceso en referencia el juzgado, a través de auto del 11 de octubre de 2022, resolvió tener por notificado al demandado Chaparro Cabrera en los términos del Artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, asimismo, le reconoció personería a su procurador judicial. Contra esa decisión se interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación alegando que la notificación se surtió por conducta concluyente a partir del poder allegado el 5 de octubre de 2022, y no por la notificación personal combatida. Mediante providencia del 23 de marzo de 2023 no se accedió a lo pedido, tras considerar que el acto de notificación personal se efectuó a través de correo electrónico del 12 de julio de 2022, dirigido a la dirección hectorhogera@hotmail.com, con el lleno de los requisitos que establece la ley, concluyendo que el término de traslado corrió entre el 15 de julio y 12 de agosto de 2022. De modo que, como la contestación de la demanda se adosó el 18 de noviembre se tuvo por extemporánea, dando lugar a que no se le impartiera el trámite de rigor.

2.- En providencia del 20 de junio de 2023, el pretor de primer grado decretó las pruebas pedidas oportuna y debidamente por las partes, señalando frente al interpelado que ***“6.2. PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA HECTOR FABIAN CHAPARRO CABRERA – Pese a estar notificado en debida forma no contestó la presente demanda”***.

3.- En oposición, elevó recurso de reposición y subsidiario de apelación, reeditando exactamente los argumentos blandidos frente al auto del 11 de octubre de 2022, es decir, vuelve para insistir obstinadamente que su notificación se dio por conducta concluyente y no mediante notificación personal, que los términos empiezan a correr después del envío del enlace de acceso al expediente, por tanto, la contestación de la demanda es oportuna y debe tenerse en cuenta. Frente a lo cual, en impartición del 19 de enero de los corrientes no se accedió al remedio horizontal aliviando que los reclamos izados fueron materia de análisis y pronunciamiento en auto del 23 de marzo de 2023, donde se estimó que la notificación fustigada colmaba todos los parámetros legales, así mismo se determinó que la contestación de la demanda se arribó de manera extemporánea ***“de ahí que no haya lugar al decreto de las pruebas pedidas, pues insiste el despacho, que al ser la contestación intempestiva, deviene improcedente proveer acerca de la solicitud probatoria”*** concediendo la apelación.

III. CONSIDERACIONES

1.- Esta Sala unitaria es competente para decidir el recurso propuesto.

2.- El problema jurídico sometido a consideración de la Sala estriba en determinar si la decisión de abstenerse de proveer sobre las pruebas solicitadas por el convocado dada la extemporaneidad de su contestación de la demanda, encuentra o no abrigo en nuestra normativa procesal.

3.- En el *sub examine*, de entrada, impera relieves que el recurrente con notorio extravío, para fundamentar sus recursos, reedita los planteamientos de inconformidad lanzados contra la providencia del 11 de octubre de 2022, mismos que fueron objeto de pronunciamiento por el juez *a quo* en auto del 23 de marzo de 2023, donde se abordaron con amplitud y suficiencia, coligiendo que la notificación personal del señor Héctor Chaparro acaeció el 12 de julio de 2022, que no por conducta concluyente y, por ende, el término de traslado se surtió entre el 15 de julio al 12 de agosto de esa anualidad. Luego, como la contestación de la demanda se presentó el 18 de noviembre, se tuvo como extemporánea para todos sus efectos.

No es de olvidar que el proceso está compuesto por una sucesión ordenada de actos judiciales, tendientes a dictar sentencia que solucione la problemática entregada a la jurisdicción, en tal sentir, por razones de orden y de método, así como por lógica elemental, el juez debe agotar correcta y organizadamente cada etapa procesal y luego avanzar a la siguiente, sin perjuicio de realizar control de legalidad para sanear o corregir los yerros en que se hubiese podido incurrir. Así lo ha sostenido la H. Corte Constitucional, al pregonar que:

“Todo proceso es un conjunto reglado de actos que deben cumplirse en determinados momentos y acatando un orden que garantice su continuidad, «al punto que un acto no resulta posible si no se ha superado la oportunidad en que debe ejecutarse otro anterior, y así sucesivamente, pero una vez clausurada cada etapa se sigue inexorablemente la siguiente, aunque se hayan omitido las actividades señaladas para esa ocasión. Desde este punto de vista, el proceso es un sistema de ordenación del tiempo dentro del cual los diferentes sujetos procesales deben cumplir las actividades requeridas por la ley, las cuales constituyen actos preparatorios para la resolución de las pretensiones de las partes, a través de la sentencia»”¹.

Desde esta perspectiva, es incontestable que las alegaciones concernientes a las eventuales irregularidades en el acto de notificación, si fue personal o por conducta concluyente, como con vehemencia lo afirma el personero judicial del demandado, el término con que contaba para contestar la demanda, y la presentación intempestiva de la contestación del libelo inaugural son aristas que ya fueron abordadas y analizadas ampliamente por el señor juez y objeto de su decisión, que alcanzó firmeza al cobrar ejecutoria, en consecuencia, es un asunto ya zanjado por la jurisdicción, como se afirma gráficamente se convirtió en ley del proceso con efectos vinculantes, no solo para el juez, sino también para las partes, y que por razones de orden procesal y el principio de preclusión no puede volverse otra vez sobre la misma temática, sin perjuicio de socavar las bases del debido proceso, la seguridad jurídica y hasta la confianza legítima.

Bien se ve entonces que la reflexión capital y definitoria que sella la suerte adversa de la censura, gravita en el hecho de que el pertinaz pedimento atañe a una cuestión procesal que por elemental lógica debía resolverse y dirimirse con antelación al decreto de pruebas, como efectivamente acaeció en esta disputa y a cuyas resoluciones debemos obediencia, so pena de entronizar el caos en su tramitación y borrar de un plumazo el principio de la preclusión y ordenación procesal, amén de otras garantías no menores.

3.1.- Para abonar más razones, cabe agregar que en estrictez jurídica no podría afirmarse sin injuriar la lógica y la razón misma que el funcionario de primer nivel con la decisión confutada está negando el decreto de las pruebas solicitadas por el convocado, pues tal postura desconocería el hecho principalísimo de que, al margen de su materialidad, el pedimento probatorio corrió la misma suerte de la contestación de la demanda, que al ser extemporánea se incorporó sin consideración alguna, despojándola de los efectos jurídicos que con ella se perseguían, entre otros, el decreto de las pruebas rogadas.

¹ Corte Constitucional, Sentencia C-012 del 23 de enero de 2002, M. P. Dr. Jaime Araújo Rentería.

Huelga acodar que ley adjetiva impone a las partes en el proceso ciertas cargas de las cuales la más conocida es la de la prueba, aunque ciertamente no es la única, el modo de pedir, ordenar y practicar las pruebas exige *per se* la satisfacción de determinados requisitos consagrados en la norma procesal que constituyen una ordenación legal, una ritualidad de orden público, es decir, son reglas de derecho estricto y de obligatorio acatamiento no sólo por las partes sino por el juez, quien como director del proceso, debe garantizar, en aras del derecho de defensa de los contendientes, los principios generales de la contradicción y publicidad de la prueba, y en esa línea, debe velar por el cumplimiento de las exigencias consagradas en los ritos procedimentales. De tal suerte que, si el demandado no cumple en oportunidad con sus deberes procesales tampoco deberían sorprenderle las consecuencias jurídicas propias de su conducta contumaz.

En conclusión, los argumentos izados por el impugnante se encuentran destituidos de todo soporte fáctico y jurídico y no pueden hallar buen suceso, habida cuenta que el empecinado pedimento atañe a una cuestión previamente solventada y definida, sumado a que la extemporaneidad de la contestación de la demanda implicó que se dilapidara la oportunidad para la solicitud de pruebas, de capital importancia para la defensa de sus intereses dentro del proceso. Por consiguiente, anduvo bien el juzgador de instancia al no considerar tal petición, debiéndose así confirmar la providencia confutada.

En razón y mérito de lo brevemente expuesto, esta Sala Civil Singular del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia apelada.

SEGUNDO: Condenar en costas de esta instancia a la parte recurrente. Para tal efecto se señalan como agencias en derecho la suma de \$1.300.000.

TERCERO: Regrese el proceso al Despacho de origen para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE

HOMERO MORA INSUASTY
Magistrado